

**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
SALA LABORAL**



**SECRETARÍA**

**EDICTO**

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

**HACE SABER:**

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Radicación:	05001310500320170024501
Proceso:	Ordinario
Demandante:	MARÍA ELENA VÉLEZ GÓMEZ
Demandado:	COLPENSIONES
M. P.	MARIA PATRICIA YEPES GARCIA SL TSM
Fecha de fallo:	30/06/2023
Decisión:	MODIFICA Y ADICIONA

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 4/07/2023 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

**RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS**  
Secretario



**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL**

Medellín, treinta (30) de junio de dos mil veintitrés (2023)

DEMANDANTE	MARÍA ELENA VÉLEZ GÓMEZ
DEMANDADA	COLPENSIONES
ORIGEN	Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín
RADICADO	050013105003201700245-01
TEMAS	Reliquidación Pensión de vejez, retroactivo pensional, intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993
CONOCIMIENTO	Apelación y consulta
ASUNTO	Sentencia de segunda instancia

En la fecha y hora señaladas, la Sala Sexta de decisión Laboral, integrada por las Magistradas ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, LILIANA MARIA CASTAÑEDA DUQUE y la Ponente MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA, al tenor de lo dispuesto en el numeral 1° del art. 13 de la Ley 2213 de 2022 profiere sentencia escrita, dentro del proceso ordinario laboral promovido por MARÍA ELENA VÉLEZ GÓMEZ contra ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES-.

En atención al memorial aportado vía electrónica el 5 de octubre de 2021<sup>1</sup> suscrito por MARICEL LONDOÑO RICARDO en calidad de representante legal de la sociedad MUÑOZ Y ESCRUCERÍA S.A.S, se reconoce personería a la abogada JOHANNA ANDREA LONDOÑO HERNÁNDEZ, identificada con CC 1.047.994.157 y portadora de la T.P. 201.985 del C.S. de la J., para representar como mandataria sustituta, los intereses de Colpensiones. En virtud de lo anterior se revocan las sustituciones anteriores.

**I. ANTECEDENTES**

**Hechos y pretensiones de la demanda<sup>2</sup>**

La señora María Elena Vélez Gómez formula demanda contra Colpensiones, pretendiendo **i)** se declare que es beneficiaria del régimen de transición

<sup>1</sup> 02SegundaInstancia, Archivo 01SustitucionColpensiones003201700245  
<sup>2</sup> 01PrimeraInstancia, Archivo 05001310500320170024500\_C01.Pdf. Págs. 2 a 16

consagrado en el art. 36 de la Ley 100 de 1993; y en consecuencia, **ii)** se ordene a Colpensiones reconocerle pensión de vejez en aplicación del acuerdo 049 de 1990 aprobado por el decreto 758 del mismo año desde el 23 de septiembre de 2013 en que afirma cumplió 55 años de edad; **iii)** intereses de mora del artículo 141 de la Ley 100 de 1993; **iv)** a lo ultra y extra petita y; **v)** costas procesales.

De manera **subsidiaria** solicita:

Se ordene a Colpensiones **i)** pagar la pensión de vejez a partir del 23 de septiembre de 2016 fecha en la cual la demandante cumplió los 57 años de edad y cesó las cotizaciones al sistema, **ii)** reliquidar la mesada pensional, pagándose el mayor valor para las mesadas reconocidas para el año 2017 y las causadas de manera sucesiva, **iii)** intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993, **iv)** a lo ultra y extra petita y; **v)** costas procesales.

Fundamentó sus pretensiones en que nació el 23 de septiembre de 1959, cumpliendo 55 años de edad el mismo día y mes del año 2014, fecha de entrada en vigencia el Sistema General de Pensiones para los servidores públicos del nivel departamental, es decir, 30 de junio de 1995, se encontraba vinculada con el Departamento de Antioquia, conservando el régimen de transición por cuanto acredita a julio 2005, 18 años laborados, de las cuales 664 semanas están cotizadas al ISS hoy Colpensiones y 284 a Fonprecon, para un total de 948 semanas, cumpliendo así con lo establecido en el parágrafo transitorio 4 del acto legislativo 01 de 2005 que exige 750 semanas, solicitó el 19 de abril de 2016, el reconocimiento y pago de su pensión de vejez, resuelta de manera desfavorable por Colpensiones mediante resolución GNR 216662 del 22 de julio de 2016, aduciendo no acreditar el requisito de la edad establecido en la ley, Tal decisión fue confirmada al resolver los recursos de reposición y subsidiario de apelación, a través de las resoluciones GNR 266803 y VPB 37054 del 9 y 23 de septiembre de 2016 respectivamente.

Presentó nueva solicitud pensional el 30 de diciembre de 2016, resuelta por Colpensiones en resolución GNR 2579 del 5 enero de 2017 de manera positiva, reconociéndole la prestación en cuantía de \$4.352.398, con un IBL de \$6.679.555 al cual le aplicó una tasa de reemplazo del 65.16%, efectiva a partir del mes de enero de 2017, frente a la cual interpuso recurso de reposición y apelación, por no haberle otorgado la prestación bajo los parámetros del acuerdo 049 de 1990 aprobado por el decreto 758 del mismo año, recursos resueltos mediante las resoluciones GNR 49003 del 15 de febrero de 2017 y DIR. 1629 del 15 de marzo de 2017, confirmando en todas sus partes la resolución atacada, al considerar la entidad que la prestación sólo se puede analizar su situación bajo lo establecido en la ley 797 de 2003, desconociendo que, para el 23 de septiembre de 2016, cuando cumplió los 57 años de edad no presentaba cotizaciones al Sistema de Seguridad Social, adeudando en este caso las mesadas causadas entre el 23 de septiembre y diciembre de 2016.

### Oposición a las pretensiones de la demanda<sup>3</sup>

La demandante no tiene derecho al retroactivo pensional que reclama, al no haber reportado la novedad de retiro del Sistema General de Pensiones, requisito necesario para el disfrute a partir de la fecha que solicita según el artículo 13 del decreto 758 de 1990, aplicado por remisión del artículo 31 de la ley 100 de 1993, así como tampoco es beneficiaria del régimen de transición al contar al 1 de abril de 1994, sólo con 34 años de edad y con 354 semanas, no cumpliendo con los requisitos de ley, por ello, su prestación se debe estudiar de conformidad con lo establecido en la ley 797 de 2003, atendiendo a que para la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones se encontraba vincula al senado de la república, entidad del orden nacional, razón por la cual para determinar la transición en su caso, se toma en cuenta el 1 de abril de 1994, y no el 30 de junio de 1995 como lo pide. Se opone al reconocimiento de los intereses del artículo 141 de la ley 100 de 1993, al no incurrirse en mora en el pago de la mesada pensional de la demandante.

Excepcionó: Inexistencia del retroactivo pensional, Inexistencia de la obligación de reajustar la pensión de vejez, Improcedencia de intereses moratorios, Buena fe de Colpensiones, Imposibilidad de condena en costas, Prescripción y Compensación

### Sentencia de primera instancia<sup>4</sup>

El 2 de abril de 2018, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín, profirió sentencia condenando a Colpensiones reconocer, liquidar y pagar retroactivo pensional de vejez en favor de la demandante, causado desde el 23 de septiembre de 2016 hasta el 31 de diciembre del mismo año, en la suma de \$17.502.443, ordenando el pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993, causados desde el 23 de enero de 2017 hasta el pago efectivo del retroactivo, declaró prospera la excepción de inexistencia de la obligación de reliquidar y reajustar pensión de vejez de la demandante, e improcedentes las demás, finalmente condenó en costas a Colpensiones, fijando agencias en derecho en \$2.343.000

Fundamentó su decisión en la aplicación del principio de favorabilidad, tratado por la Corte Suprema de Justicia y Corte Constitucional, se fundamenta en la sentencia SU 769 de 2014 sobre la posibilidad de **sumar tiempos públicos y privados** para efectos de reconocer una pensión de vejez, exponiendo que el caso de la demandante no se rige por el régimen de transición pensional bajo los parámetros del decreto 758 de 1990, al no encontrarse vinculada al sector privado al 1 de abril de 1994, ni al 30 de junio de 1995, por el contrario, se encontraba vinculada al sector público, no siendo posible su aplicación en los términos del artículo 36 de la ley 100 de 1993, por no ser el régimen anterior al que venía afiliada, siendo la normatividad aplicable para el reconocimiento pensional la ley

---

<sup>3</sup> 01PrimeralInstancia, Archivo 05001310500320170024500\_C01.Pdf. Págs.77 a 84

<sup>4</sup> 01PrimeralInstancia, Archivo 05001310500320170024500\_C01.Pdf. Págs.117

797 de 2003 como lo hizo en su momento Colpensiones. La Aquo acudió a la teoría del **retiro tácito** para reconocer el retroactivo pensional causada entre el 23 de septiembre de 2016 y el 31 de diciembre del mismo año, calculando el retroactivo en la suma de \$17.502.443, reconociendo intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993, ante el retardo en el pago de dichas mesadas.

### **Recurso de apelación**

#### **Apoderado de la demandante:**

Solicitó se revoque la sentencia de primera instancia aduciendo que la demandante al 30 de junio de 1995, fecha en la que se encontraba vinculada con el departamento de Antioquia, contaba con 35 años de edad, siendo -por ello-, beneficiaria del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la ley 100 de 1993 y podersele aplicar el decreto 758 de 1990, dada la multiplicidad de normas de diferentes regímenes que operaban antes de la vigencia del sistema general de pensiones esto es, ley 33 del 1985, ley 71 del 1988, Acuerdo 049 de 1990, argumentando la pertinencia de aplicarle como beneficiaria del Régimen de transición cualquiera de ellos, por presentar tiempos privados entre los años 1987 a 1989, tiene una multiplicidad de regímenes a los cuales optar para acceder a la pensión, explicando las razones de su pretensión,<sup>5</sup> de aplicación del decreto 758 de 1990 precisando que por principio de favorabilidad opta por éste al reunir con creces la densidad de semanas de cotización exclusivas al instituto de los seguros sociales hoy Colpensiones y 55 años de edad, para que su prestación le sea reconocida bajo esta normatividad, que le permite optar por una tasa de reemplazo del 84% en razón de las 1174 semanas acreditadas. Y en caso de no acoger sus argumentos, pide se revise el valor de la mesada calculada en la sentencia para el año 2016 en la que se consideró sólo el valor obtenido por Colpensiones para el año 2017 (\$4.352.368), el cual aplicaría para la fecha en la que operó su retiro tácito esto es, 1 de mayo del año 2016, en consecuencia, habría lugar a reliquidar la prestación con el IPC y calcular una nueva mesada para el año 2017.

#### **Apoderada Colpensiones:**

Solicitó se revoque la decisión del juez de instancia, mostrando inconformidad frente al retroactivo pensional objeto de condena, en atención que el artículo 13 del decreto 758 de 1990 aplicable por remisión del artículo 31 de la ley 100 de 1993, establece que para liquidar la prestación económica de pensión de vejez se tendrá en cuenta hasta la última semana cotizada por este riesgo, sin que el retiro pueda ser tácito o supuesto, sino que debe figurar en la planilla o en el medio de pago respectivo, y la historia laboral de la hoy demandante no media novedad de retiro, siendo su última cotización en el mes de mayo de 2016. En lo relativo a los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993 adujo, que si bien la actora solicitó la prestación el día 19 de abril del año 2016 no se puede tener en cuenta esa fecha en la contabilización del término previsto para el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, dado que para esta data, la actora **no reunía los**

---

5

**requisitos de ley mínimos para acceder a la pensión de vejez**, por lo cual, Colpensiones no estaba obligado a reconocerla dentro de los cuatro meses siguientes a su solicitud. Pide tener en cuenta la sentencia de la Corte Suprema de Justicia- Sala de Casación Laboral con ponencia del magistrado Jorge Mauricio Burgos Ruiz SL 704 de 2013 radicación 44454. En caso de no acoger sus reproches, se verifique el monto de la mesada pensional, y la liquidación del retroactivo hallado por el A Quo correspondiente al año 2016, pide absolución en costas por actuar de buena fe y que se autorice el descuento de los aportes en salud del retroactivo pensional liquidado.

### **Alegatos de conclusión en segunda instancia**

En esta sede, ambas partes, recorrieron oportunamente el traslado para alegar de conclusión, así:

**Parte demandante<sup>6</sup>:** Reitera los argumentos esgrimidos al formular la alzada, solicitando se declare que es beneficiaria del régimen de transición pensional consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y en consecuencia le asiste derecho a que su pensión sea reconocida bajo los parámetros establecidos en el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, al cumplir con la edad y semanas requeridas por esa norma y estar dentro de los límites establecido en Acto Legislativo 01 de 2005 . Refiere la **sentencia** proferida por la **H. Corte Suprema de Justicia – Sala Laboral, con radicación 33343 del 17 de octubre de 2008**, donde se indicó, *que con los regímenes de transición especialmente creados para cuando se modifiquen los requisitos para acceder a los derechos pensionales, se ha buscado por el legislador no afectar de manera grave las expectativas legítimas de quienes, al momento de producirse el cambio normativo, se hallaban más o menos próximos a consolidar el derecho*, pidiendo también se confirme la condena relativa a intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993

**Colpensiones<sup>7</sup>:** Reitera los argumentos de su apelación, expresando que el retiro tácito se configura ante la concurrencia de tres situaciones: haber cesado el afiliado en las cotizaciones, cumplimiento de los requisitos para pensionarse, solicitud de manera expresa del reconocimiento de la pensión, y para el caso de los servidores públicos, es ineludible acreditar el retiro de la entidad pública; Requisitos que son de manera concurrente y no de forma parcial para determinar el disfrute o la efectividad de la pensión.

Adujo improcedencia de los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993, por haberle aplicado la normatividad pertinente y no causarse en caso de reliquidación pensional, referenciando la sentencia SL-4720 de 2020, donde establece reglas excepcionales en las cuales no procede el reconocer y pagar intereses moratorios cuando se dio aplicación a la normatividad que regulaba la situación de la asegurada para la fecha de reconocimiento de la pensión de vejez.

---

<sup>6</sup> 02SegundaInstancia, Archivo 06AlegatosParteDemandante003201700245

<sup>7</sup> 02SegundaInstancia, Archivo 05AlegatosColpensiones003201700245

De no exonerar el pago de intereses pide abordar la debida interpretación de los plazos con que cuentan las autoridades para responder las peticiones pensionales, conforme a la sentencia T-588 de 2003 reiterada en la sentencia SU – 065 de 2018 emitida por la Corte Constitucional donde recordó que la postura asumida por este organismo en sede de control abstracto y concreto, indica que la moratoria se causa por el solo hecho de la cancelación tardía de las mesadas pensionales, lo que acontece a partir de la expiración del plazo de los 6 meses para hacer efectivo el ingreso a nómina y pago de las mesadas pensionales.

En lo demás comparte la conclusión a la cual llegó el juez de instancia respecto a la no aplicación del régimen de transición conforme al principio de inescindibilidad de la norma, deviniendo improcedente la sumatorio de tiempos para efectos de reconocer reliquidaciones prestacionales.

## **II. SON CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL**

La competencia de la Sala está dada por los artículos 66, 66A del CPTSS, respecto de los puntos objeto de apelación. Igualmente se surte el grado jurisdiccional de Consulta en favor de Colpensiones, conforme al artículo 69 del CPTSS modificado por la Ley 1149 de 2007, y en acatamiento de la decisión de la H. Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, en sentencia de radicado 7382 de 2015

Examinados los hechos y pretensiones de la demanda, así como la oposición formulada por la demandada, entiende la Sala, que el problema jurídico a resolver se circunscribe a determinar: a) si la señora María Elena Vélez Gómez es beneficiaria del régimen de transición, y de ser ello así, b) establecer si procede el reconocimiento y pago de la pensión de vejez con fundamento en el Decreto 758 de 1990, definiéndose las fechas de causación y disfrute de la prestación, c) pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993.

De manera subsidiaria y de no salir avante lo anterior, se analizará si le asiste derecho: a) al pago de la pensión de vejez a partir del 23 de septiembre de 2016, fecha en la que cumplió los 57 años de edad, b) a que le sea reliquidada su mesada pensional y el consecuente pago del reajuste del mayor valor para las mesadas reconocidas para el año 2017 y las causadas en lo sucesivo, y c) al pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993.

### **Hechos relevantes probados documentalmente**

- La señora María Elena Vélez Gómez nació el 23 de septiembre de 1959<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> 01PrimerInstancia, Archivo 05001310500320170024500\_C01.Pdf. Págs.20 a 21

- Mediante resolución GNR 216662 del 22 de julio de 2016 Colpensiones niega el reconocimiento pensional a la demandante argumentando que no acreditaba el requisito de edad (57 años) establecido en el artículo 33 de la ley 100 de 1993 modificado por el artículo 9 de la ley 797 de 2003<sup>9</sup>.
- Tal decisión fue confirmada al desatar los recursos de reposición y el subsidiario de apelación en las resoluciones GNR 266803 del 9 de septiembre de 2016 y VPB 37054 del 23 de septiembre de 2016, argumentando que la demandante no era beneficiaria del régimen de transición, al no acreditar 35 años de edad al 1 de abril de 1994, y reunir en esa data sólo 354 semanas cotizadas<sup>10</sup>.
- Ante una nueva solicitud radicada por la actora ante Colpensiones el 30 de diciembre de 2016, en resolución GNR 2579 del 5 de enero de 2017, **le reconoce pensión de vejez** en cuantía de \$4.352.398 a partir del 1 de enero de 2017, calculada bajo un IBL de \$6.679.555, con una tasa de reemplazo del 65.16%, considerando 1.459 semanas sufragadas<sup>11</sup>.
- Registra la historia laboral expedida por Colpensiones y actualizada al 8 de julio de 2017, que la hoy demandante reúne 1.174 semanas cotizadas entre el 2 de abril de 1987 y el 31 de mayo de 2016<sup>12</sup>.
- Según formatos 1, 2 y 3 de certificación de información laboral, salarios y salario mes a mes, expedido por el Senado de la República, la señora María Elena Vélez Gómez prestó sus servicios a esa entidad entre el 18 de julio de 1989 al 30 de enero de 1995<sup>13</sup>, realizando aporte al fondo denominado FONPRECON

#### a) Régimen de transición ley 100 de 1993, artículo 36

El artículo 36 de la Ley 100 de 1993, permitió a los beneficiarios del régimen de transición, el reconocimiento de su pensión de vejez con las condiciones de edad, tiempo y monto del régimen anterior al que ostentaran pertenencia para el momento de entrada en vigencia el sistema. Para el caso, la demandante indica que serían las previstas en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, es decir, 55 años de edad, y densidad de 1000 semanas, o 500 cotizadas en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad.

La señora María Elena Vélez Gómez nació el 23 de septiembre de 1959<sup>14</sup>; se le otorgó pensión de vejez mediante acto administrativo GNR 2579 a partir del 1 de enero de 2017, con un monto del 65,16%, el valor de mesada pensional fue

---

<sup>9</sup> 01PrimeralInstancia, Archivo 05001310500320170024500\_C01.Pdf. Págs. 40 a 44

<sup>10</sup> 01PrimeralInstancia, Archivo 05001310500320170024500\_C01.Pdf. Págs. 51 a 61

<sup>11</sup> 01PrimeralInstancia, Archivo 05001310500320170024500\_C01.Pdf. Págs. 63 a 70

<sup>12</sup> 01PrimeralInstancia, Archivo 05001310500320170024500\_C01.Pdf. Págs. 99 a 112

<sup>13</sup> 01PrimeralInstancia, Archivo 05001310500320170024500\_C01.Pdf. Págs. 99 a 112

<sup>14</sup> 01PrimeralInstancia, Archivo 05001310500320170024500\_C01.Pdf. Págs. 20 a 22



reconocido en \$4.352.398, ingresada en nómina en enero del mismo año y pagado a partir de febrero de 2017, pensión que se concedió conforme a la Ley 100 de 1993, modificado por la ley 797 de 2003<sup>15</sup>.

Indica la demandante que le asiste derecho al reconocimiento y pago de pensión de vejez acorde con el régimen de transición, a la luz del art 36 de la Ley 100 de 1993, norma que exige tener 35 años de edad para mujeres o haber cotizado por más de 15 años anteriores a la vigencia del Sistema General de pensiones.

En el caso concreto, la activa tenía 34 años de edad al 1 de abril de 1994 cuando inició para ella la vigencia del Sistema Pensional actual, por ser empleada del sector público del orden nacional, al servicio del Senado de la República, entidad en la cual estuvo vinculada desde el 18 de julio de 1989 hasta el 30 de enero de 1995, tal y como se puede comprobar con la certificación emitida por esta entidad en los formatos N°1, 2 y 3 (Certificado de información Laboral, Certificado de salario base y Certificación de salarios mes a mes)<sup>16</sup>, que militan en el expediente, realizando sus aportes a FONPRECON.

La historia laboral expedida por Colpensiones y actualizada al 8 de julio de 2017, registra 113,42 semanas entre el 2 de abril de 1987 al 30 de junio de 1989<sup>17</sup>, en virtud de aportes realizados por empleadores del sector privado, y sumadas al tiempo laborado por la actora al servicio al Senado de la República acreditaría un total de 355,42 semanas al 1 de abril de 1994, **no** alcanzando 15 años entre servicios y tiempos cotizados a esa data. En este orden de ideas, aunado a la edad, la demandante no sería beneficiaria de transición bajo lo normado en el inciso 1° del artículo 151 de la ley 100 de 1993. Tal situación estaba ya vigente al 30 de enero de 1995, momento de su retiro del servicio como empleada del sector público del nivel nacional.

No obstante, en el libelo introductor y en su apelación insiste en que es beneficiaria el régimen de transición, por encontrarse vinculada con el Departamento de Antioquia para el 30 de junio de 1995, fecha en la cual entró a regir el Sistema General de Pensiones para los servidores públicos del nivel departamental, data para la cual tenía cumplidos más de 35 años de edad.

Ahora, es cierto que, luego de su retiro del sector público a nivel nacional, la actora ingresó como servidora pública al servicio del Departamento de Antioquia a inicios de 1995 hasta 1997, de donde se infiere conforme a certificación emitida por la Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional de la misma entidad<sup>18</sup>, que para el día 30 de junio de ese año<sup>19</sup>, se encontraba vinculada en el

---

<sup>15</sup> 01PrimerInstancia, Archivo 05001310500320170024500\_C01.Pdf. Págs. 63 a 70

<sup>16</sup> 01PrimerInstancia, Archivo 05001310500320170024500\_C01.Pdf. Págs. 33 a 38.

<sup>17</sup> 01PrimerInstancia, Archivo 05001310500320170024500\_C01.Pdf. Págs. 99 a 112.

<sup>18</sup> 01PrimerInstancia, Archivo 05001310500320170024500\_C01.Pdf. Pág. 35

<sup>19</sup> “Cabe puntualizar que en el presente caso no se adujo ni acreditó que las autoridades competentes del municipio demandado hubiesen anticipado la entrada en vigencia del sistema general de pensiones para sus trabajadores para una fecha anterior al 30 de junio de 1995, de donde se sigue que dicha vigencia empezó en esta fecha”. Ver Sentencias de la SCL de la CSJ., del 19 de septiembre de 2007,

sector territorial, momento en que tenía cumplidos 35 años de edad, lo que observado bajo el principio de *in dubio pro operario*, que en los términos del art. 53 de la C.N., y el Art. 21 del C.S.T., aplicables también en materia de seguridad social, da lugar a resolver el conflicto de normas según su favorabilidad para el trabajador, y permite interpretar que adquirió el régimen de transición bajo esa segunda modalidad de vínculo laboral, en razón al plazo máximo de inicio de vigencia de la Ley 100 de 1993 en ese nivel territorial de servicio público – 30 de junio de 1995-, prevista en el parágrafo del Art. 151 de la ley 100 de 1993 pues adicionalmente, ante la posibilidad de aplicación de diversas interpretaciones a una o varias disposiciones jurídicas, corresponde al operador judicial, inclinarse por la que más convenga al trabajador, lo que de paso para esta sala, permite también advertir que en una persona pueden concurrir dos fechas de entrada en vigor del sistema de pensiones, debiéndose optar por la más favorable al asegurado.

Frente al principio de *in dubio pro operario*, ha expresado la H. Corte Constitucional en sentencias como la T-001-2023, del 13 de enero de 2023, lo siguiente:

*“....El principio de favorabilidad consagrado en el artículo 53 de la Carta Política. Reiteración de jurisprudencia.*

*40. La Constitución establece en su artículo 53 que los jueces deben optar por la situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho<sup>20</sup>. Sin embargo, no cualquier duda habilita al juez para escoger una norma o interpretación determinada. La duda debe ser seria y objetiva, derivada de la solidez jurídica de las posturas encontradas. La duda debe ser además respecto de un aspecto normativo y no fáctico<sup>21</sup>. Así mismo, deben concurrir las interpretaciones en juego en un caso concreto, es decir, las normas concurrentes y su hermenéutica deben ser aplicables a los mismos supuestos de hecho<sup>22</sup>. Cabe anotar que el principio de favorabilidad constituye un imperativo constitucional de aplicación directa, por parte de las autoridades administrativas y judiciales encargadas de definir y examinar derechos propios del sistema general de seguridad social...”*

Se tiene entonces, que conforme el artículo 151 de ley 100 de 1993, el Sistema General de Pensiones, empezó a regir a partir del 1 de abril de 1994, no obstante, en su parágrafo único se autorizó que para los servidores públicos del nivel departamental, municipal y distrital, entrara a regir a más tardar el 30 de junio de 1.995, en la fecha que así lo determine la respectiva autoridad gubernamental.

Esa norma, según las estipulaciones del artículo 289 ibídem, tuvo vigencia desde la publicación de la ley, esto es, a partir del 23 de diciembre de 1993, lo que

---

radicación 31203, citada en sentencia CSJ SL del 1º de feb. 2011, rad. 35888, y en la SL6708-2016MP. Fernando Castillo Cadena.

<sup>20</sup> Sentencia SU-140 de 2019.

<sup>21</sup> Sentencias T-130 de 2014; T-088 de 2018; y SU-140 de 2019.

<sup>22</sup> Sentencias T-545 de 2004, T-248 de 2008, T-090 de 2009, entre otras.

significa para esta sala, que la calidad de trabajador privado o público del orden territorial, que ha de verificarse para determinar el inicio de la vigencia del sistema en pensiones en cada caso, debe suplirse en esta última fecha, pues lo que hizo el legislador fue limitar los extremos temporales de funcionamiento del sistema de pensiones, desde la vigencia de Ley 100, para quienes a ese momento ostentaran una u otra calidad, pero sin que ello signifique una restricción en cuanto a la movilidad que pueda tener un trabajador del sector público al privado o viceversa, de un orden a otro (nacional, territorial, distrital, etc).

Por su parte, el artículo 2 del decreto 691 de 1994, por medio del cual “*se incorporan los servidores públicos al sistema general de pensiones y se dictan otras disposiciones*”, dispuso que el sistema general de pensiones para los servidores públicos departamentales, municipales y distritales, y de sus entidades descentralizadas, entrará a regir a más tardar el 30 de junio de 1995, en la fecha en que así lo determine el respectivo gobernador o alcalde.

Bajo tal contexto, conforme a las normas atrás relacionadas, podrían interpretarse en el sentido que la calidad del trabajador debe verificarse y existir al 1° de abril de 1994 o al 30 de junio de 1995, en ese sentido, se tiene que la señora Vélez Gómez ingresó como servidora pública del Departamento de Antioquia en mes de febrero 1995, infiriéndose conforme a la certificación emitida por la Secretaria de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional de la misma entidad<sup>23</sup>, que para el día 30 de junio de ese año<sup>24</sup>, se encontraba vinculada en el sector territorial, momento en que tenía cumplidos 35 años de edad<sup>25</sup>, siendo entonces en principio y por lo antes explicado, beneficiaria del régimen de transición en virtud de la edad.

Así las cosas y como se dijo a inicio, la actora manifiesta que le asiste derecho al reconocimiento y pago de pensión de vejez acorde con el régimen de transición, a la luz del art 36 de la Ley 100 de 1993, específicamente, bajo las premisas del acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, que exige para las mujeres, 55 años de edad, y densidad de 1000 semanas, o 500 cotizadas en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, según el artículo 12 del referido acuerdo.

Corolario de lo dicho, se tiene que, posteriormente, el parágrafo transitorio 4° del art.1 del Acto Legislativo 01 de 2005, reguló que el régimen de transición no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010, salvo para quienes tuviesen más de

---

<sup>23</sup> 01PrimerInstancia, Archivo 05001310500320170024500\_C01.Pdf. Pág. 35

<sup>24</sup> “Cabe puntualizar que en el presente caso no se adujo ni acreditó que las autoridades competentes del municipio demandado hubiesen anticipado la entrada en vigencia del sistema general de pensiones para sus trabajadores para una fecha anterior al 30 de junio de 1995, de donde se sigue que dicha vigencia empezó en esta fecha”. Ver Sentencias de la SCL de la CSJ., del 19 de septiembre de 2007, radicación 31203, citada en sentencia CSJ SL del 1° de feb. 2011, rad. 35888, y en la SL6708-2016MP. Fernando Castillo Cadena.

<sup>25</sup> 01PrimerInstancia, Archivo 05001310500320170024500\_C01.Pdf. Pág. 20

750 semanas al inicio de la vigencia del referido acto legislativo, a quienes se extendió el beneficio de la transición hasta 2014<sup>26</sup>.

La demandante alcanzó la edad de 55 años el 23 de septiembre de 2014<sup>27</sup>, demostrando al 25 de julio de 2005 una densidad de 902,42 semanas, conforme a las historias laborales que militan en el expediente y las certificaciones laborales expedidas por las entidades públicas, acreditando el derecho a que se le extienda el régimen de transición pensional hasta el 31 de diciembre de 2014<sup>28</sup>.

En este punto, no puede pasar inadvertido que, ante la nueva composición de esta sala, se reestudió el tema antes tratado, llegando a concluir en la procedencia del cambio de postura en torno al asunto, en razón a lo no prohibición de la ley 100 de 1993 respecto a que al 1 de abril de 1994, cuando el trabajador no reúna los requisitos del régimen de transición, pudiera con posterioridad beneficiarse del plazo máximo de la entrada en vigor de dicha disposición – 30 de junio de 1995-, por nueva vinculación al sector público territorial, respetando la prerrogativa que la misma norma concede para los servidores públicos, apelando al principio de favorabilidad desarrollado por la H. Corte Constitucional. Por ello, se **modificará** la sentencia emitida por el A quo frente a este punto, por las razones aquí expuestas.

Definido lo anterior, y en consonancia con lo solicitado por la activa, se hace relevante analizar la posibilidad de sumar tiempos públicos y privados para efectos de reconocer la reliquidación de la prestación de la actora.

#### **b) Sumatoria de semanas cotizadas con tiempos de servicio/ Reliquidación y reajuste de la mesada pensional de la demandante**

A la señora Vélez Gómez se le otorgó pensión de vejez mediante resolución GNR 2579 de enero 5 de 2017 con efectos a partir del 1 de ese mismo mes y año con una tasa de reemplazo del 65,16%, el valor de mesada pensional fue reconocido en \$4.352.398, ingresada en nómina en enero del mismo año y pagado a partir de febrero de 2017, pensión que se concedió conforme a la Ley 100 de 1993, modificado por la ley 797 de 2003<sup>29</sup>.

Se tiene entonces que la actora nació el 23 de septiembre de 1959<sup>30</sup>, cumpliendo los 55 años en el mismo día y mes del año 2014; en la historia laboral actualizada al 8 de julio de 2017<sup>31</sup>, se reporta como último ciclo sufragado el mes de mayo de 2016, y cesación definitiva de cotizaciones sin novedad de retiro, con un total de

---

<sup>26</sup> Parágrafo transitorio 4o. El régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014

<sup>27</sup> 01PrimeralInstancia, Archivo 05001310500320170024500\_C01.Pdf. Pág. 20

<sup>28</sup> 01PrimeralInstancia, Archivo 05001310500320170024500\_C01.Pdf. Págs.23/30, 32/ 38 y 99/112

<sup>29</sup> 01PrimeralInstancia, Archivo 05001310500320170024500\_C01.Pdf. Págs. 63 a 70

<sup>30</sup> 01PrimeralInstancia, Archivo 05001310500320170024500\_C01.Pdf. Págs. 20 a 22

<sup>31</sup> 01PrimeralInstancia, Archivo 05001310500320170024500\_C01.Pdf. Págs. 99 a 112

1.174 semanas.

Según formatos 1, 2 y 3 de certificación de información laboral, salarios y salario mes a mes, expedido por el Senado de la República, la señora María Elena Vélez Gómez prestó sus servicios a esa entidad entre el 18 de julio de 1989 al 30 de enero de 1995<sup>32</sup>, realizando aporte al fondo denominado FONPRECON, tiempo que traducido en semanas representan un total de 289, quiere decir ello, que la demandada a la fecha de cumplimiento de sus 55 años, acreditaba el requisito de semanas para acceder a su pensión de vejez. (Más de 1000)

Presentó una primera reclamación de reconocimiento de pensión de vejez el día 19 de abril de 2016, siendo negada por Colpensiones mediante la resolución GNR 216662 del 22 de julio de 2016, por no tener en esa data la edad mínima de 57 años<sup>33</sup>, decisión no acertada según el análisis que se ha venido realizando, por cuanto la hoy demandante alcanzó los 55 años en el mes de septiembre de 2014.

El día 30 de diciembre de 2016, la señora Vélez Gómez solicitó nuevamente a Colpensiones su reconocimiento pensional, siendo concedida en acto administrativo GNR 2579 del 5 de enero de 2017 como ya se dijo.

Así las cosas, **pretende la actora** se tenga en cuenta que es beneficiaria del régimen de transición, para que su prestación sea reliquidada con base en las disposiciones del acuerdo 049 de 1990 aprobado por el decreto 758 del mismo año, implicando ello además, tener presente los periodos en que laboró al servicio del Senado de la República entre el 18 de julio de 1989 al 30 de enero de 1995<sup>34</sup>, sin aportes al ISS hoy Colpensiones.

Al respecto, venía sosteniendo esta Sala de Decisión, conforme al precedente judicial construido por la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia que la vincula, que el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año no permitía la acumulación o sumatoria de semanas cotizadas con tiempos de servicio cotizados o no; **sin embargo**, ante la nueva composición de esa alta corporación, mediante sentencias SL1947 de 2020 y SL1981 de 2020, se consideró **viable dicha sumatoria**, reiterando tal postura en las sentencias SL2557-2020, SL2659-2020, SL4529-2020, SL182-2021 y SL3802-2021 al ordenar la reliquidación de unas pensiones de vejez.

Por lo anterior, se considera importante abordar lo relativo a la diferencia que existe en la **causación y disfrute de la prestación**.

El **disfrute** de la pensión de vejez está regulado en los artículos 13 y 35 del Acuerdo 049 de 1990, a cuya aplicación remite el artículo 31 de la Ley 100 de

---

<sup>32</sup> 01PrimeraInstancia, Archivo 05001310500320170024500\_C01.Pdf. Págs. 99 a 112

<sup>33</sup> 01PrimeraInstancia, Archivo 05001310500320170024500\_C01.Pdf. Págs. 40 a 44

<sup>34</sup> 01PrimeraInstancia, Archivo 05001310500320170024500\_C01.Pdf. Págs. 99 a 112

1993<sup>35</sup>. Tales normas señalan: “*Pero será necesaria su desafiliación al régimen para que se pueda entrar a disfrutar de la misma*”, “*...las pensiones del Seguro Social se pagarán por mensualidades vencidas, previo el retiro del asegurado del servicio o del régimen, según el caso, para que pueda entrar a disfrutar de la pensión...*”.

De igual manera se interpreta que aun cuando no se marque la novedad en la planilla correspondiente, la cesación definitiva de cotizaciones se asimila al retiro, hecho éste acaecido en el sub exámine el 31 de mayo de 2016, conllevando a que el disfrute de la prestación deba disponerse a partir del día siguiente, pues si bien la señora Vélez Gómez acreditó los 55 años de edad el 23 de septiembre de 2014, siguió realizando aportes hasta la fecha indicada previamente.

La H. Corte Suprema de Justicia, en fallo del 5 de junio de 2012, radicación N° 42289 de la SCL, dilucidó:

*“En sentencia del 22 de febrero de 2011, radicación 39391, la Sala dejó sentado que la ley de seguridad social establece como necesaria la desafiliación del sistema para que proceda el pago de la pensión de vejez, y recordó que deben estudiarse las particularidades de cada caso, pues su aplicación ha de ajustarse a las especiales circunstancias que emergen de la situación pensional del afiliado, además que no es posible hacer responsable al asegurado de los errores de la administradora de pensiones, quien como en esta oportunidad acontece debió reconocer el derecho en su oportunidad, por estar ya satisfechos la totalidad de los requisitos exigidos por los reglamentos del ISS”.*

La materialización del **retiro tácito** como expresión de una conducta coherente del afiliado que cesa definitivamente sus aportes al sistema pensional y seguidamente al cumplir los requisitos solicita a la administradora de pensiones pertinente el reconocimiento y pago de su pensión, ha sido validada por la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral en otros pronunciamientos, como la sentencia SL 5603 de 2016, SL 17.999 de 2017 y SL 929 de 2019.

Es dable concluir entonces, que la aquí demandante, tuvo derecho al **disfrute de la prestación** a partir del cumplimiento íntegro de los requisitos de ley, esto es, desde el 1 de junio de 2016, data en la que ya había cesado su aportes, acreditaba los 55 años de edad y más de 1000 semanas, por ello, deviene procedente el reconocimiento del retroactivo pensional pretendido, el cual se causa del día 1 de junio de 2016 al 31 de diciembre de ese mismo año, atendiendo a que Colpensiones mediante la resolución GNR 2579 del 5 de enero de 2017, le reconoció la pensión de vejez a la actora desde el día primero (1) de enero de 2017. Se **modificará** en ese sentido la providencia emitida por el A Quo.

---

<sup>35</sup> “Serán aplicables a este régimen las disposiciones vigentes para los seguros de invalidez, vejez y muerte a cargo del Instituto de Seguros Sociales, con las adiciones, modificaciones y excepciones contenidas en esta ley”.

Ahora, previo a realizar el cálculo del retroactivo pensional, y en virtud a que la mesada hallada por Colpensiones fue objeto de reparo por las partes, así como el retroactivo hallado por el juez de instancia, procedió esta sala a calcular el IBL de toda la vida y de los últimos diez años efectivamente cotizados por la actora, obteniendo los siguientes resultados. (ver tablas anexas). Tasa de remplazo utilizada 90%, con base en 1455.71 semanas, atendiendo a lo contemplado en el artículo 20 del decreto 758 de 1990, y declararse en la actora el beneficio del régimen de transición.

El Ingreso Base de Liquidación -IBL- de la mesada pensional de la demandante se calculó conforme al art.21 de la Ley 100 de 1993, teniendo en cuenta el promedio indexado de los últimos diez (10) años efectivamente cotizados, obteniéndose **\$6.685.901,96**. Igual cálculo se realizó con el promedio indexado de lo cotizado durante toda la vida, obteniéndose un IBL de **\$5.150.165,88**, siendo la primera (diez últimos años) más favorable para la actora, se le aplica una tasa de remplazo del **90%** según el artículo 20 del decreto 758 de 1990, lo que arroja una primera mesada pensional de **\$6.017.312** para el año 2016, superior a la hallada en su momento por Colpensiones para el año 2017 (\$4.352.398), al igual que la tasa de reemplazo utilizada (90%).

### c) Excepciones

La excepción de **prescripción** formulada por la demandada no está llamada a prosperar porque habiéndose causado el disfrute de la prestación el 1 de junio de 2016, reclamada la prestación el 30 de diciembre de 2016<sup>36</sup>, teniendo reunidos los presupuestos legales se interrumpió el término de prescripción, y aunado a que se otorgó el derecho pensional mediante resolución GNR 2579 del 5 de enero de 2017 y la respectiva demanda se interpuso el 29 de marzo de 2017<sup>37</sup>, no operó el fenómeno extintivo de mesadas por no haber excedido los tres (3) años a que refieren los arts.488 del CST y 151 del CPTSS.

### d) Condena en concreto:

Por concepto de retroactivo pensional causado a partir del 1 de junio de 2016 contabilizado hasta el 31 de diciembre de 2016 con base en una mesada pensional equivalente a **\$6.017.312**, y 13 mesadas anuales, Colpensiones adeuda la suma de CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS (\$48.138.496), detallada a continuación: Se modificará el monto de la condena impuesta por este concepto por el A quo, para en su lugar imponer la aquí hallada.

<sup>36</sup> 01PrimeraInstancia, Archivo 05001310500320170024500\_C01.Pdf. Págs. 63 a 69

<sup>37</sup> 01PrimeraInstancia, Archivo 01ExpedienteDigitalizado2120160479. Pdf. Págs.9

RETROACTIVO PENSIONAL				
Año	IPC	# mesadas	Valor pensión	Total Retroactivo
2016	5,75%	8	\$ 6.017.312	\$ 48.138.496
			TOTAL	\$ 48.138.496

Seguidamente y en concordancia con lo anteriormente explicado respecto a los IBL hallados por la sala y la mesada pensional calculada para el año 2016, la Sala encuentra que Colpensiones adeuda por concepto de **reajuste pensional** calculado desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de junio de 2023, la suma de CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS (\$187.790.818), detallada a continuación:

REAJUSTE PENSIONAL						
Año	IPC	Valor reconocido	Valor real	Diferencia mensual	# mesadas	Total retroactivo
2017	4,09%	\$ 4.352.398	\$ 6.363.307	\$ 2.010.909	13	\$ 26.141.823
2018	3,18%	\$ 4.530.411	\$ 6.623.567	\$ 2.093.156	13	\$ 27.211.023
2019	3,80%	\$ 4.674.478	\$ 6.834.196	\$ 2.159.718	13	\$ 28.076.334
2020	1,61%	\$ 4.852.108	\$ 7.093.896	\$ 2.241.787	13	\$ 29.143.234
2021	5,62%	\$ 4.930.227	\$ 7.208.107	\$ 2.277.880	13	\$ 29.612.441
2022	13,12%	\$ 5.207.306	\$ 7.613.203	\$ 2.405.897	13	\$ 31.276.660
2023		\$ 5.890.505	\$ 8.612.055	\$ 2.721.551	6	\$ 16.329.303
					TOTAL	\$ 187.790.818

La mesada para 2023 se pagará en el equivalente de \$8.612.055. Se autorizará a la demandada que descuente el valor de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social en salud frente a los retroactivos hallados, con fundamento en el artículo 143 de la Ley 100 de 1993, según lo disponen el art.143 de la Ley 100 de 1993, el inciso tercero del art.42 del Decreto 692 de 1994 y en lo decantado por la H. Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral en esta materia.<sup>38</sup> Frente a este último punto, se adicionará la sentencia.

A partir de julio de 2023 deberá Colpensiones continuar pagando el valor de la mesada pensional en cuantía de \$8.612.055 y anualmente se incrementará conforme al art.14 de la Ley 100 de 1993.

f) Intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993.

A partir del 1o. de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta Ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la

<sup>38</sup> En las sentencias de SL 1195 del 29 de enero de 2014, radicación 48.918, SL 9782 del 23 de julio de 2014, radicación 54.583; SL 10143 del 30 de julio de 2014, radicación 45.232; SL 13547 del 1 de octubre de 2014 radicación 47.264, SL 4899/19, SL 5213/19, SL 5218/19 y SL 5481/19, entre otras:



tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectuó el pago.

Sobre el particular, la sala trae a colación las reflexiones de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en su línea jurisprudencial en cuanto a que los intereses moratorios no son de imposición automática, véase la relación contenida entre otras en sentencia SL 1370 de 2020<sup>39</sup>.

Bajo estas circunstancias se tiene que, la reliquidación de la pensión de vejez concedida a la actora se deriva del análisis del principio de favorabilidad - *in dubio pro operario*- en la definición de la calidad que para la entrada en vigencia desplegaba que le permitiera dar paso a iniciar la vigencia de la Ley 100 de 1993 el 30 de junio de 1995 para beneficiarse de la transición, y con ello, por principio de favorabilidad la aplicación del decreto 758 de 1990, que da lugar a elevar el valor de la mesada pensional por incremento en la tasa de reemplazo aplicable en virtud del régimen de transición, de modo que la reliquidación ordenada se otorga con fundamento en una posición jurisprudencial y de interpretación en coherencia con el principio constitucional de favorabilidad, y ello permite exonerar a Colpensiones de esta pretensión, por estar sustentada la negativa de la entidad en estrictas prerrogativas legales, siendo esta una de las causales de exoneración de los intereses según la **sentencia SL 1370 de 2020**<sup>40</sup>. En este aspecto **se modificará** la sentencia proferida en primera instancia.

En su lugar, se dispondrá la indexación del retroactivo, dada la necesidad de compensar el efecto que la inflación ocasiona sobre las diferencias pensionales.

---

<sup>39</sup> “1. El derecho pensional reclamado se hubiese causado antes de la vigencia de esa ley, es decir, previo al 1° de abril de 1994 (CSJ SL, 16 sep. 2008, rad. 34358).

2. Existe una nueva liquidación que genere un mayor valor o diferencias en la mesada pensional (CSJ SL 6 dic. 2011, rad. 30852 y CSJ SL17725-2017).

3. La negativa de las entidades para reconocer las prestaciones a su cargo, tiene respaldo en las normas que en un comienzo regulaban la situación o su postura proviene de la aplicación minuciosa de la ley sin los alcances o efectos que en un momento dado puedan darle los jueces (CSJ SL704-2013).

4. Se otorga una prestación pensional en aplicación de un cambio de criterio jurisprudencial (CSJ SL 787-2013, rad.43602, reiterada en la sentencia CSJ SL2941-2016).

5. Se inaplica el requisito de fidelidad al sistema. Así se expuso en la sentencia CSJ SL10637-2014, reiterada en CSJ SL6326-2016, CSJ SL070-2018 y CSJ SL4129-2018.

6. La controversia se define bajo una interpretación normativa, como sucede en la aplicación del principio de la condición más beneficiosa (CSJ SL12018-2016).

7. Existe controversia entre beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, tal como se precisó en sentencias CSJ SL 21 sep. 2010, rad. 33399 y CSJ SL 14528-2014”.

<sup>40</sup> “3. La negativa de las entidades para reconocer las prestaciones a su cargo, tiene respaldo en las normas que en un comienzo regulaban la situación o su postura proviene de la aplicación minuciosa de la ley sin los alcances o efectos que en un momento dado puedan darle los jueces (CSJ SL704-2013).

### **g) Indexación**

Debido a que no prosperó la pretensión de intereses moratorios, en subsidio se ordenará la indexación del retroactivo adeudado para que no se afecte con el transcurso del tiempo por la devaluación de la moneda colombiana, con siguiente fórmula y criterios:

$$\frac{\text{ÍNDICE FINAL} \times \text{VALOR A INDEXAR} - \text{VALOR A INDEXAR}}{\text{ÍNDICE INICIAL}} = \text{VALOR INDEXADO}$$

Los valores con los que ha de remplazarse la fórmula deben ser:

ÍNDICE FINAL correspondiente al IPC para la fecha en que se realice el pago de cada mesada.

ÍNDICE INICIAL correspondiente al IPC para vigente a la fecha en que debió pagarse cada mesada.

VALOR A INDEXAR refiere al valor de cada mesada pensional adeudada.

### **III. EXCEPCIONES**

Las excepciones formuladas por la demandada se entienden implícitamente resueltas, mereciendo especial pronunciamiento la prescripción, abordada y estudiado en los términos expuestos.

### **IV. COSTAS**

Para resolver lo alegado por Colpensiones en esa instancia, respecto de la condena en costas, deviene imperativo imponerlas a cargo de dicha entidad, por haber omitido su deber de aplicar la teoría del retiro táctico para efecto de reconocerle la prestación a la demandante desde que causó el derecho, es decir, desde la cesación de sus cotizaciones - 31 de mayo de 2016- data para la cual ya acreditaba la edad (55 años) y las semanas mínimas requeridas, y al resultar vencida en juicio, deviene acertada su imposición en la primera instancia.

En cuanto a las costas en esta sede, estarán a cargo Colpensiones por haber resultado vencida en su recurso. Se fijan las agencias en derecho en el equivalente a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes en 2023 (2 SMMLV). Lo anterior a tenor de lo dispuesto en el artículo 365 del Código General del Proceso.

Sin costas a cargo de la parte demandante en esta instancia, por haber prosperado de manera parcial su recurso.

## V. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

En mérito de lo expuesto, la **SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

### RESUELVE

**PRIMERO:** MODIFICAR Y ADICIONAR la sentencia proferida el 2 de abril de 2018, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ordinario de doble instancia promovido por la señora MARÍA ELENA VÉLEZ GÓMEZ contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, en siguiente sentido:

Declarar que la demandante es beneficiaria de régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la ley 100 de 1993, que la remite a la aplicación del Decreto 758 de 1990 por principio de favorabilidad, atendiendo a lo motivado en esta providencia.

Condenar a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES a reconocer y pagar a la referida demandante por concepto de **retroactivo de mesadas pensionales** liquidado entre el 1 de junio y el 31 de diciembre de 2016, la suma de CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS (\$48.138.496), suma que se deberá indexar al momento del pago conforme a los parámetros indicados en la parte motiva de la providencia.

Reconocer y pagar a la demandante por concepto de **retroactivo de reajuste pensional** liquidado entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de junio de 2023, la suma de CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS (\$187.790.818), suma que Colpensiones deberá indexar al momento de su pago, de conformidad con los parámetros descrito en la parte motiva de esta providencia.

La mesada pensional de la demandante se continuará pagando a partir del 01 de julio de 2023 en el equivalente a \$8.612.055 y anualmente se incrementará conforme al art.14 de la Ley 100 de 1993.

Se autoriza a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, a efectuar los descuentos respectivos al sistema de seguridad social en salud sobre las mesadas pensionales adeudadas y el reajuste pensional otorgado.

**SEGUNDO:** Costas en segunda instancia a cargo de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, dentro de las cuales se fijan las

agencias en derecho, en la suma de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes para 2023 (2 SMMLV), en favor de la demandante.

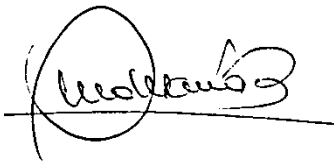
Notifíquese por edicto esta decisión.

Devuélvase el proceso al Juzgado de origen.

Las Magistradas,



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ

LILIANA MARIA CASTAÑEDA DUQUE  
(En ausencia justificada)